Libertad de religión y de consciencia en países musulmanes:
evolución y situación actual

Eva Saenz-Diez

Universidad de Lovaina

saenzdiez@gmail.com

Resumen

Basándose en textos constitucionales e informes, se presenta en este estudio la evolución en esta última década de la libertad religiosa y de consciencia en los países musulmanes, así como el impacto que dichas evoluciones han tenido.

Presentamos cómo en países en los que religión y política están vinculadas y en los que las constituciones hacen, de una manera u otra, referencia a la shari‘a y a la noción de *orden público*, dicha problemática está estrechamente vinculada con la de ciudadanía y recíprocamente.

Nota biográfica

Eva Saenz-Diez, es investigadora sobre el Mundo árabe, Egipto en particular en el GERMAC (Grupo de estudios e investigaciones sobre el Mundo árabe contemporáneo) - Universidad de Lovaina.

Sus principales ámbitos de investigación son:

- educación en el mundo árabe y vínculo entre educación y radicalización islamista,
- educación islámica en Europa,
- libertad religiosa en el los países árabes y musulmanes.

Titular de un Doctorado co-dirigido por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de París sobre *La Política científica de Egipto de 1952 a la Revolución informática*, es también autora del libro *Égypte d'une Révolution à l'autre. Politiques d'enseignements et changements sociaux*, Publisud, París (2013).

Palabras clave

Libertad religiosa y de consciencia, ciudadanía, minorías religiosas, Constituciones, orden público.

¿Qué es la Libertad de religión y de conciencia?

El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos insta que:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”

El artículo 18 protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia (no se limita en su aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones y creencias con características o prácticas institucionales análogas a las de las religiones tradicionales). Los términos “creencias” y “religión” deben entenderse en sentido amplio.

Violaciones de la libertad religiosa y de conciencia

La libertad de religión y conciencia implica el derecho a no tener religión (ser ateo o agnóstico) o a que se protejan las creencias no religiosas. 22 países penalizan legalmente la apostasía, mientras que en 11 países¹ (Afganistán, Irán, Malasia, Maldivas, Mauritania, Nigeria, Qatar, Arabia Saudí, Somalia, EAU, Yemen) se castiga con la pena de muerte. En Pakistán no hay pena de muerte por apostasía, pero sí para la “blasfemia”. El umbral para definir la blasfemia es tan bajo que se puede *de facto* considerar que el ateísmo se castiga con la muerte en 12 países (Datta, 2016).

Por otra parte, la libertad de religión no impide que haya instituciones religiosas aprobadas por el Estado, pero no se puede obligar a nadie a unirse a esa iglesia, a participar en sus actividades o a pagarle impuestos.

El papel del Estado es fomentar la tolerancia de todas las religiones o no religiones, y si se regulan las actividades, debe hacerse con total neutralidad.

Sin embargo, habrá interferencia si las restricciones hacen prácticamente difícil o casi imposible el ejercicio de la religión o creencia.

Estudios sobre la libertad religiosa y de conciencia en el mundo

A nivel internacional, y debido entre otras cosas al incremento de violaciones de la libertad religiosa y de conciencia, el interés hacia estas cuestiones ha ido aumentando. Organismos gubernamentales o privados publican de manera periódica informes sobre la situación en el mundo. Es el caso del *American Pew Research Center (Pew)*, del *U.S. State Department*, del *United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)* y de la fundación alemana *Ayuda a la Iglesia necesitada (Aid to the Church in Need, 2021)*². Otros organismos, como *Amnistía Internacional*, *Human Rights Watch* u *Open Doors* (informes anuales sobre la libertad religiosa y de conciencia en el mundo, pero únicamente relativa a los cristianos perseguidos) tratan también de estos temas.

¹ Sudán abandonó la ley anti apostasía en julio del 2020 (BBC, 2020).

² Informes bienales sobre la Libertad religiosa en el mundo y tratando todas las religiones.

Según el último informe de AIN (Aid to the Church in Need, 2021), 62 países (más de 5 mil millones de personas afectadas) están catalogados en naranja y rojo, es decir países en los cuales se llevan a cabo discriminación o persecución (Aid to the Church in Need, 2021). Es de destacar que en dichos países, las violaciones a la libertad religiosa y de conciencia van también vinculadas a las violaciones de otros derechos (como el derecho personal, el de familia, el de expresión, de asociación, etc.).

En su último informe, la USCIRF designa 14 países como Países de Especial Preocupación de los cuales la mitad son países musulmanes. Y de los 12 países recomendados para la Lista de Vigilancia Especial del Departamento de Estado, 10 son musulmanes (USCIRF, 2021).

Evolución reciente de la libertad religiosa en el mundo

Según el informe *Pew*³ (Pew, 2019), durante la década que va de 2007 a 2017, las restricciones gubernamentales a la libertad de religión y conciencia -leyes, políticas y acciones de los funcionarios estatales que restringen las creencias y prácticas religiosas- aumentaron notablemente en todo el mundo en general, y en los países musulmanes en particular.

Las hostilidades sociales relacionadas con la religión -incluyendo la violencia y el acoso por parte de individuos, organizaciones o grupos privados- también han aumentado.

De hecho, los datos muestran que 52 gobiernos -incluidos algunos países muy poblados como China, Indonesia y Rusia- imponen niveles “altos” o “muy altos” de restricciones a la libertad de religión, frente a los 40 de 2007.

Y el número de países en los cuales la población experimenta niveles más altos de hostilidades sociales -no necesariamente gubernamentales- relacionadas con la religión ha aumentado de casi un 50% (pasando de 39 a 56).

Restricciones gubernamentales

Las restricciones gubernamentales han evolucionado de varias maneras. Las leyes y políticas que restringen la libertad religiosa (como la exigencia de que los grupos religiosos se registren para poder operar) y el favoritismo del gobierno hacia ciertos grupos religiosos (a través de la financiación de la educación religiosa, la propiedad y el clero, por ejemplo) han sido los tipos de restricciones más frecuentes a nivel mundial (es decir en cada una de las cinco regiones analizadas en el estudio: América, Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio-África del Norte y África subsahariana). Ambos tipos de restricciones han ido en aumento; la puntuación media mundial en cada una de estas categorías aumentó más del 20% entre 2007 y 2017.

Pew divide las restricciones gubernamentales en las siguientes categorías:

- ***Favoritismo gubernamental de los grupos religiosos***
- ***Leyes y políticas que restringen la libertad religiosa***
- ***Límites gubernamentales a las actividades religiosas***
- ***Acoso gubernamental a los grupos religiosos***

Según el informe *Pew*, las restricciones religiosas han aumentado en todo el mundo durante la última década, pero no lo han hecho de manera uniforme en todas las regiones geográficas ni en todos los tipos de restricciones. El nivel de restricciones comenzó siendo alto en la región de Oriente Medio y África del Norte, y actualmente es el más alto en las ocho categorías

³ En los siguientes párrafos, se presentaran los principales puntos de dicho estudio (2007-2017), poniendo en relieve aquellos referentes a la región Oriente Medio y África del Norte.

medidas por el estudio. Pero algunos de los mayores aumentos de la última década se han producido en otras regiones, como África subsahariana, donde algunos grupos han tratado de imponer sus normas religiosas a otros mediante secuestros y conversiones forzadas.

La puntuación media del acoso gubernamental en la región de Oriente Medio y África del Norte (como los procesos penales contra los ahmadíes u otros grupos religiosos) ha aumentado un 72%.

Favoritismo gubernamental de los grupos religiosos⁴

Una de las conclusiones constantes de una década de seguimiento es el nivel relativamente alto de restricciones gubernamentales a la religión en Oriente Medio y el Norte de África, que se ha clasificado por encima de todas las demás regiones cada año desde 2007 hasta 2017. La brecha en el favoritismo del gobierno es particularmente grande (el país medio de la región Oriente Medio & Norte de África obtiene una puntuación casi dos veces mayor que el país medio de cualquier otra región).

De hecho, 19 de los 20 países de Oriente Medio (todos excepto Líbano) favorecen una religión: 17 tienen una religión oficial del Estado y dos tienen una religión preferida o favorecida.

En todos estos países, excepto Israel, la religión favorecida es el Islam.

Hay 49 países en los que los musulmanes representan más del 50% de la población con un total de 1.200 millones de musulmanes, lo que representa el 74% de la población musulmana mundial de 1.600 millones (World Population Review, 2021; Desilver y Masci, 2017).

Además, todos los países de la región se remiten de algún modo a las autoridades o doctrinas religiosas en cuestiones jurídicas. Por ejemplo, en los casos de derecho de familia en Egipto, cuando los cónyuges tienen la misma religión, los tribunales aplican las leyes canónicas de ese grupo religioso (musulmana, copta, melquita greco católica, etc.). Sin embargo, cuando el esposo es musulmán y la esposa tiene una religión diferente (copta por ejemplo), o si los cónyuges son miembros de diferentes confesiones cristianas, los tribunales se remiten al derecho de familia islámico (véase § Orden público). Igualmente, la shari‘a es también aplicada para cuestiones de derecho de sucesión a las mujeres cristianas (heredan la mitad que sus hermanos, etc.) aunque ha habido recientemente por lo menos un par de dictámenes judiciales dándoles a las mujeres cristianas derecho a la igualdad en términos de herencia (Egyptian Streets, 2019). Hemos de notar que en Egipto, todas las materias del estatuto personal que se consideran -con la excepción del derecho de sucesiones-, de orden público, no están codificadas. Estas materias constituyen en todos los casos normas de ley islámica que se consideran aplicables sobre la base del artículo 280, que considera que la ley islámica es la ley general en los casos de estatuto personal. De hecho, el Tribunal de Casación reiteró en varias sentencias que las normas de la ley egipcia sobre la herencia son una cuestión de orden público. Es decir que los particulares no son libres de adaptar las normas del derecho de sucesiones de acuerdo con sus propias necesidades (Berger, 2001: 110).

⁴ ¿Reconoce la constitución o la ley fundamental del país una religión o una modalidad religiosa favorecida? ¿Reciben todos los grupos religiosos el mismo nivel de acceso y privilegio por parte del gobierno? ¿Proporciona el gobierno fondos u otros recursos: ¿para programas de educación religiosa y/o escuelas religiosas? ¿ para la propiedad religiosa? ¿ para actividades religiosas distintas de la educación o la propiedad? ¿Es obligatoria la educación religiosa en las escuelas públicas? ¿El gobierno nacional se remite de alguna manera a las autoridades, los textos o las doctrinas religiosas en cuestiones jurídicas?

Sin embargo, el favoritismo gubernamental apenas ha aumentado en Oriente Medio a lo largo del estudio, en parte porque empezó a un nivel tan alto que no había mucho margen de crecimiento en la escala.

Algunos de los mayores aumentos se produjeron en el África subsahariana. Por ejemplo, en 2009, las Comoras aprobaron un referéndum constitucional que declaraba al Islam como religión estatal (Freedom House, 2019).

En la región de Asia-Pacífico, el favoritismo gubernamental hacia determinados grupos religiosos también ha aumentado desde 2007. Por ejemplo, en Turquía, el gobierno aprobó en 2017 una ley que otorgaba a las autoridades religiosas musulmanas a nivel de provincia y de distrito la autoridad para registrar los matrimonios y officiar las bodas en nombre del Estado (Lord, 2018: 117). El gobierno alegó que esto haría más eficiente el proceso de registro, mientras que los críticos argumentaron que violaba los principios del laicismo en la constitución del país y no satisfacía las necesidades de otros grupos religiosos (no musulmanes).

A partir de 2015, el islam es la religión estatal más común en todo el mundo (27 de los 43 países que consagran una religión oficial (63%). Por otra parte, según *Pew* la mayoría de los países con las puntuaciones más altas en cuanto a favoritismo gubernamental a partir de 2017 (entre otros Afganistán, Bahrein y Bangladesh) tienen el islam como religión oficial del Estado.

Si el favoritismo gubernamental ha subido durante esta última década de un 3,7 a un 4,7 a nivel global, en la región MENA, se ha “mantenido” alrededor de un 9 (pasa de un 9,0 en el 2007 a un 9,2 en el 2017⁵).

Leyes y políticas gubernamentales que restringen la libertad religiosa⁶

Junto con el favoritismo, la amplia categoría de “leyes y políticas gubernamentales que restringen la libertad religiosa” incluye algunos de los tipos de restricciones más comunes identificados por el estudio.

Una vez más, la región de Oriente Medio y África del Norte presenta niveles más altos que otras regiones, aunque tras un aumento inicial entre 2007 y 2008, el nivel general de leyes y políticas gubernamentales que restringen la libertad religiosa se ha mantenido relativamente estable en el conjunto de la región MENA (llegando y manteniéndose alrededor de un 7, cuando la media global oscila cerca de un 4). En otras regiones se han producido aumentos recientes de las restricciones en esta categoría -en particular en el África subsahariana, que experimentó un fuerte aumento de las leyes y políticas gubernamentales que restringen la libertad religiosa entre 2014 y 2017-.

Las normas sobre el registro gubernamental de grupos religiosos contribuyen en gran medida a las altas puntuaciones en esta categoría. Muchos países exigen algún tipo de registro para que los grupos religiosos puedan operar. En Oriente Medio y el Norte de África, es el caso en más de ocho de cada diez países.

En algunos casos, los gobiernos sólo reconocen a un conjunto específico de grupos religiosos y niegan el registro (y, por tanto, el reconocimiento oficial) a todos los demás (Argelia con

⁵ https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/pf_07-15-19_religiousrestrictions-0-03/

⁶ ¿Cómo afectan la constitución/ley fundamental y otras leyes y políticas nacionales a la libertad religiosa? ¿Tiene el gobierno nacional una organización establecida para regular o gestionar los asuntos religiosos? ¿Pide algún nivel de gobierno a los grupos religiosos que se registren por alguna razón, incluso para tener derecho a beneficios como la exención de impuestos?

Iglesias protestantes, Egipto con bahaíes, etc.). En otros lugares, los obstáculos burocráticos crean procesos de registro engorrosos que perjudican a determinados grupos.

En Arabia Saudí, mientras tanto, una nueva ley antiterrorista publicada en noviembre de 2017 criminaliza como terrorista (HRW, 2017) a “cualquiera que desafíe, directa o indirectamente, la religión o la justicia del rey o del príncipe heredero”, y prohíbe “la promoción de ideologías ateas en cualquier forma”, “cualquier intento de poner en duda los fundamentos del Islam” y las publicaciones que “contradigan las disposiciones de la ley islámica.” Esta versión mantiene una definición demasiado amplia del terrorismo que incluye “obstruir la aplicación de la Ley Fundamental” (que nombra el Corán y la Sunna como constitución), “perturbar el orden público”, y representar al rey y al príncipe heredero “de cualquier forma que desacredite la religión y la justicia” (USCIRF, 2018: 5). De hecho, la práctica pública – el proselitismo, el culto público, y la exhibición de símbolos religiosos – de todas las religiones no musulmanas es ilegal en el país, así como obviamente la apostasía.

A escala mundial, el índice correspondiente al nivel de leyes y políticas gubernamentales que restringen la libertad religiosa ha subido esta última década de un 3,5 a un 4,3, en la región MENA, ha pasado de 5,9 a 7⁷.

Límites gubernamentales a las actividades de grupos e individuos religiosos⁸

En la región de Oriente Medio y África del Norte, 18 de los 20 países de la región informaron que limitaban la predicación pública. Este tipo de restricciones no se limita a las confesiones minoritarias. En países como Jordania, por ejemplo, el gobierno supervisó los sermones en las mezquitas y exigió a los predicadores que se abstuvieran de hablar de política para evitar el malestar social y político y poder contrarrestar las opiniones extremistas. El gobierno jordano comenzó a distribuir temas y textos recomendados para los sermones a los imanes de las mezquitas en 2017, y los que no siguieron las recomendaciones fueron objeto de multas y prohibiciones de predicación (Madanat, 2019).

Entre los países con los niveles más altos de límites a la religión, se aplican innumerables políticas que restringen las actividades religiosas. En las Maldivas, por ejemplo, es un delito penal promover una religión distinta del Islam, castigado con hasta cinco años de cárcel (USDS, Maldives, 2019).

Las restricciones de esta categoría también son comunes en toda Asia Central. En 2017, el gobierno de Turkmenistán seguía denegando visados a los extranjeros si se sospechaba que tenían la intención de realizar labores misioneras; el gobierno también impedía la importación de literatura religiosa (USDS, Turkmenistan, 2019). De forma similar, en Uzbekistán, una agencia gubernamental seguía bloqueando la importación de literatura tanto cristiana como islámica (USDS, Uzbekistan, 2019). Y una ley kazaja establece que la producción, publicación y difusión de literatura religiosa solo se permite tras la aprobación del gobierno (USDS, Kazakhstan, 2019).

⁷ https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/pf_07-15-19_religiousrestrictions-0-05/

⁸ Algún nivel de gobierno: ¿interfiere en el culto u otras prácticas religiosas? ¿limitada la predicación pública de los grupos religiosos, el proselitismo, la conversión de una religión a otra?

A nivel global, el índice correspondiente a los límites gubernamentales relativos a las actividades de grupos e individuos religiosos ha subido esta última década de un 2,3 a un 3,4, en la región MENA, ha pasado de 5,2 a 6,3⁹.

Acoso gubernamental a grupos religiosos¹⁰

No sólo hay mayores niveles de acoso gubernamental a grupos religiosos en la región de Oriente Medio y Norte de África en comparación con otras regiones, sino que se ha experimentado el mayor aumento en esta categoría desde el 2007. Esta categoría mide tipos de acoso que van desde la violencia y la intimidación hasta las denuncias verbales de grupos religiosos, las prohibiciones formales de ciertos grupos incluyendo la detención y el desplazamiento forzoso. En Argelia, por ejemplo, en 2017 más de 280 ahmadíes fueron procesados debido a sus creencias religiosas (de los cuales seguían pendientes 220 en 2020) (USDS, Argelia, 2020). Y ese mismo año, en Arabia Saudí, las autoridades comenzaron a demoler un barrio de mayoría chií de 400 años de antigüedad y desplazaron a miles de personas en lo que el gobierno describió como esfuerzos antiterroristas (Illahi, 2018: 198).

El acoso a los grupos religiosos es especialmente elevado en Irán, donde las autoridades han tachado a los bahaíes de “heréticos” y “sucios (Knight, 2015: 84). En Indonesia, los gobiernos locales continuaron con sus esfuerzos para forzar las conversiones de los musulmanes ahmadíes, exigiéndoles que firmaran formularios renunciando a sus creencias antes de poder registrar los matrimonios o participar en la peregrinación del *hajj* (USDS, Indonesia, 2019).

En cuanto a los aumentos desde 2007 en esta categoría, destaca Bahréin con el ataque (por parte del gobierno suní) a manifestantes (mayoritariamente chiíes) durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en 2011.

El acoso gubernamental a grupos religiosos ha subido durante esta última década de un 1,7 a un 2,6 a nivel global. En la región MENA, ha pasado de 2,6 a 4,5¹¹.

Tensión y violencia interreligiosa¹²

La tensión y la violencia interreligiosas implican actos de violencia sectaria o comunal entre grupos religiosos. Estas tensiones pueden prolongarse y no son necesariamente recíprocas.

Según *Pew*, a diferencia de todas las demás categorías, tanto de restricciones gubernamentales como de hostilidades sociales relacionadas con la religión, la tensión y la violencia interreligiosas han disminuido desde 2007 a nivel mundial y en la mayoría de las regiones

⁹ https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/pf_07-15-19_religiousrestrictions-0-07/

¹⁰ ¿Hubo acoso, intimidación, hostilidad con violencia física o incluso intento de eliminar a grupos religiosos por parte de algún nivel del gobierno? ¿Hubo casos en los que el gobierno nacional no intervino en casos de discriminación [social] o abusos contra grupos religiosos? ¿Denunció el gobierno nacional a uno o más grupos religiosos calificándolos de “sectas” o “cultos” peligrosos y/o prohibiéndolos? ¿Ha utilizado algún nivel de gobierno la fuerza contra grupos religiosos que haya provocado la muerte de personas, abusos físicos, encarcelamientos, detenciones o desplazamientos de sus hogares, o daños o destrucción de sus propiedades personales o religiosas?

¹¹ https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/pf_07-15-19_religiousrestrictions-0-09/

¹² ¿Se produjeron actos de violencia sectaria o comunal entre grupos religiosos como consecuencia de las tensiones entre grupos religiosos? ¿Intentaron los grupos religiosos impedir el funcionamiento de otros grupos religiosos?

(excepto en el África subsahariana), y en 2017, la puntuación media de los países era mayor en la categoría de normas religiosas que en esta.

En las regiones de Asia-Pacífico, Europa y Oriente Medio-África del Norte, la medida específica de tensiones que implican numerosos casos de violencia física entre grupos religiosos descendió en los últimos años en al menos algunos países.

Aun así, en 2017, más de ocho de cada diez países de la región de Oriente Medio y África del Norte, experimentaron algún tipo de tensión comunitaria entre grupos religiosos.

A pesar de un modesto descenso de las tensiones interreligiosas en general desde 2007, todavía se produjeron algunos aumentos notables en esta categoría, especialmente en Siria. Siria vive una guerra civil desde 2011 que ha tenido un gran componente sectario, con violencia entre grupos religiosos denunciada a lo largo del conflicto.

En la región MENA, los niveles de tensión y violencia interreligiosos pasaron de 5,1 a 4,7 y a nivel mundial, se mantuvieron de 2,9 a 2,4¹³.

Violencia religiosa por parte de grupos organizados

La violencia religiosa por parte de grupos organizados incluye las acciones de grupos terroristas relacionados con la religión y el uso de la fuerza por parte de grupos organizados para dominar la vida pública con su perspectiva de la religión. Desde 2007, los mayores incrementos en esta categoría de hostilidades sociales se han producido en Europa y en la región de Oriente Medio y Norte de África.

Como en todas las demás categorías de restricciones gubernamentales y hostilidades sociales relacionadas con la religión, en Oriente Medio y el Norte de África se han registrado los mayores niveles e incrementos de violencia religiosa por parte de grupos organizados. En 2007, en cuatro países de este estudio se registraron más de 50 heridos o muertos por incidentes de terrorismo relacionado con la religión. En 2017, esa cifra ascendió a 11 de los 20 países de la región. Entre ellos se encuentran los mortíferos atentados de 2017 en Egipto, cuando hombres armados que portaban la bandera del ISIS atacaron una mezquita sufi en el norte del Sinaí, dejando 311 muertos. Y el Domingo de Ramos, los atentados suicidas en dos iglesias coptas del país -que el ISIS reivindicó- dejaron 45 muertos.

Muchos de los países con altos niveles de violencia religiosa por parte de grupos organizados tienen grupos militantes islamistas activos dentro de sus fronteras. Esto incluye al ISIS y otros grupos en Siria, a Al Qaeda en la Península Arábiga en Yemen, a Al Shabaab en Somalia, a los talibanes en Afganistán y a Hamás en los territorios palestinos.

Nigeria es uno de los países donde más ha aumentado la violencia religiosa por parte de grupos organizados desde 2007. El grupo militante islamista Boko Haram es cada vez más activo en el país, “cometiendo abusos como asesinatos en masa, secuestros, agresiones sexuales, conversiones forzadas y reclutamiento forzoso”, según el informe anual sobre libertad religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Uno de los casos más sonado en 2014, el grupo secuestró a más de 200 colegialas -que en su mayoría eran cristianas- en una escuela de Chibok, en el estado de Borno.

¹³ https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/pf_07-15-19_religiousrestrictions-0-013/

Pew estima que el nivel de violencia por parte de grupos organizados ha pasado de 4 a 5 en la región MENA, y 1,6 a 2,2 a nivel mundial¹⁴.

Acoso individual y de grupos sociales

El acoso social a grupos religiosos es una categoría amplia que abarca desde acciones individuales hasta la violencia colectiva. El acoso también puede incluir la discriminación o la publicación de artículos o caricaturas despectivas, o percibidas como tal, hacia un determinado grupo. Esta categoría también incluye los daños a la propiedad, las detenciones o secuestros, los desplazamientos, las agresiones físicas e incluso la muerte de miembros de grupos religiosos causados por particulares o grupos sociales.

De nuevo, Oriente Medio y el Norte de África han tenido casi siempre los niveles más altos de hostilidades en esta categoría (el África subsahariana tuvo el nivel más alto en 2010).

En 2012 se produjo un aumento considerable de esta categoría en Oriente Medio y el Norte de África tras los levantamientos de la Primavera Árabe de finales de 2010 y 2011. El aumento fue especialmente pronunciado en Siria.

Algunos de los países con los niveles más altos de acoso individual y de grupo social en 2017 experimentaron incidentes de violencia colectiva, entre ellos Bangladesh, donde en noviembre de 2017 una turba de aproximadamente 20.000 personas en Rangpur Sadar incendió y destruyó unas 30 casas pertenecientes a la comunidad minoritaria hindú local después de rumores sobre una publicación en Facebook por parte de un hindú que degradaba al profeta Mahoma (HWR, Bangladesh, 2018). En Pakistán, se producen de manera continua varios incidentes de ataques colectivos impunes en respuesta a acusaciones de blasfemia.

A nivel global, los índices de acoso individual y grupos sociales pasaron de 1,6 a 2,0 y para la región MENA de 2,4 a 2,9 con un pico en 2012¹⁵.

Conclusión

Según el informe *Pew*, en general, las restricciones gubernamentales a la religión y las hostilidades sociales que implican a la religión se mantuvieron bastante estables en 2017, en comparación con el año anterior. Esto marca la primera vez que hubo pocos cambios a nivel global después de dos años consecutivos de aumentos en las restricciones generales llevadas a cabo ya sea por los gobiernos o por grupos e individuos privados.

Propuesta de herramientas a la hora de mejorar la situación

¿Necesidad de legislación?

Es importante tener en cuenta que un cambio, o una ampliación de legislación puede no ser necesaria. A veces se propone una legislación especial sobre cuestiones religiosas en respuesta a un incidente, pero en realidad podría abordarse mejor mediante acciones penales o administrativas normales. Por tanto, es conveniente considerar si las leyes generales sobre fraude o agresión pueden ser suficiente para abordar el problema sin necesidad de promulgar

¹⁴ https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/pf_07-15-19_religiousrestrictions-0-015/

¹⁵ https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/pf_07-15-19_religiousrestrictions-0-017/

una nueva ley para cubrir los delitos cuando se cometen en relación con la actividad y libertad religiosa.

En caso de realmente querer mejorar la situación, es preferible mejorar el sistema penal y asegurarse que se cumplan las leyes existentes y no promulgar nuevas leyes que de todas formas no se cumplirán.

Importancia de la definición de “religión”

Al no existir una definición generalmente aceptada para estos términos en el derecho internacional, muchos Estados tienen dificultades para hacerlo. La legislación incluye a menudo el comprensible intento de definir “religión” o términos relacionados (“sectas”, “cultos”, “religión tradicional”, etc.). Se ha argumentado que estos términos no pueden definirse en sentido jurídico debido a la ambigüedad inherente al concepto de religión.

Un error común en la definición es exigir para que se considere una religión, la creencia en Dios sea necesaria. Los contraejemplos más evidentes son el budismo clásico, que no es teísta, y el hinduismo, que es politeísta.

Además, términos como “secta” y “culto” se emplean con frecuencia de forma peyorativa y no analítica. En la medida en que la legislación incluya definiciones, el texto debería revisarse cuidadosamente para garantizar que no son discriminatorias y que no prejuzgan algunas religiones o creencias a expensas de otras.

Sucede lo mismo con otros términos como blasfemia por ejemplo. ¿Qué se considera blasfemia?

¿Religión o creencia?

Las normas internacionales no hablan de religión en un sentido aislado, sino de “religión o creencia”. El aspecto de “creencia” suele referirse a creencias de conciencia profundamente arraigadas que son fundamentales. Así, el ateísmo y el agnosticismo, por ejemplo, suelen tener derecho a la misma protección que las creencias religiosas. Es muy común que la legislación no proteja adecuadamente (o no se refiera en absoluto) a los derechos de los no creyentes. Asimismo, en numerosos casos, no todas las creencias tienen derecho a la misma protección.

El extremismo religioso

La cuestión del “extremismo” religioso y la seguridad del Estado ha cobrado importancia en las últimas décadas. No cabe duda de que algunos grupos e individuos, que actúan en nombre de la religión, se han visto implicados en actos de violencia e incluso terrorismo.

Independientemente de si su motivación es sincera y religiosa, o política y manipuladora, la preocupación es que los Estados puedan utilizar el “extremismo” como justificación no sólo para responder a grupos que son realmente violentos y peligrosos, sino que puedan utilizar la retórica del “extremismo” para suprimir la expresión religiosa legítima o para atacar a grupos cuyas creencias pueden ser simplemente diferentes o inusuales.

En cuanto a la legislación, es importante que las leyes se centren en los actos realmente peligrosos o en la comisión de actos violentos, y que no otorguen indebidamente poderes policiales al Estado para reprimir a grupos que simplemente son desfavorables.

Interrelación de las normas de derechos humanos.

Las normas internacionales relativas a la libertad de religión y creencia no surgen únicamente de las cláusulas de los pactos, convenciones y documentos que abordan específicamente la religión y las creencias. También proceden de otras cláusulas, como las relativas a la asociación, la expresión y los derechos de los padres.

Margen de apreciación.

Las normas internacionales en general, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en particular, presuponen que existe un “margen de apreciación” que permite, hasta cierto punto, que los Estados promulguen leyes y apliquen políticas que pueden diferir entre sí con respecto a las distintas historias y culturas. Aunque este margen de apreciación debe respetarse, no debe interpretarse con un grado de latitud que permita socavar la esencia de los valores de los derechos humanos. Las leyes de los distintos Estados no tienen por qué ser idénticas, y aunque se les debe permitir cierta flexibilidad, esta flexibilidad debe respetar, no obstante, los importantes derechos subyacentes.

Textos constitucionales

Disposiciones constitucionales que se comparan favorablemente con las normas internacionales

Varios países predominantemente musulmanes tienen garantías constitucionales del derecho a la libertad de religión o de creencias que, a primera vista, se comparan favorablemente con las normas internacionales. Por ejemplo, las constituciones de Pakistán (1 art. 20 (a)) y Bangladesh (art. 41(1) (a)) establecen que, con sujeción a “la ley, el orden público y la moralidad... todo ciudadano tendrá derecho a profesar, practicar y propagar su religión”.

Disposiciones constitucionales menos favorables

Por el contrario, varios países en los que el islam es la religión del Estado tienen disposiciones constitucionales sobre el derecho a la libertad de religión o creencia que, a primera vista, no se comparan favorablemente con todos los aspectos de las normas internacionales. Algunos ejemplos son:

- disposiciones limitadas al culto o a la práctica de “ritos” religiosos;
- disposiciones limitadas a una o más religiones o clase de religiones. Por ejemplo, según el artículo 13 de la Constitución iraní, “los iraníes zoroastras¹⁶, judíos y cristianos son las únicas minorías religiosas reconocidas, que, dentro de los límites de la shari‘a, son libres de celebrar sus ritos y ceremonias religiosas...” Según el art. 2 de la Constitución de Afganistán, el reconocimiento de la libertad religiosa se limita a los no musulmanes. En Egipto el artículo 3 menciona claramente los cristianos y judíos.
- disposiciones que permiten limitaciones a la libertad de religión por cualquier ley ordinaria en lugar de las limitaciones permitidas por el derecho internacional (Afganistán (art. 2), Bahreín (art. 22)).

La libertad de religión o de creencias como un derecho de todo individuo

Varios países con poblaciones predominantemente musulmanas tienen constituciones que especifican claramente que el derecho a la libertad de religión o de creencias se extiende a todos los ciudadanos o a todos los individuos. Por ejemplo, Pakistán [art. 20. Con sujeción a la ley, al orden público y a las buenas costumbres a. todo ciudadano tiene derecho a profesar,

¹⁶ Exceptuando los drusos en el Líbano, en los países musulmanes no se aceptan religiones posteriores al Islam ya que suponen conversiones desde el Islam. Es por ejemplo el caso de los bahaíes (siglo XIX) que son prohibidos o perseguidos en la mayoría de dichos países.

practicar y propagar su religión; y b. toda confesión religiosa y toda secta de la misma tendrá derecho a establecer, mantener y administrar sus instituciones religiosas] o Senegal extienden el derecho de libertad de religión y creencia a “todo ciudadano” y a “todos los ciudadanos”, mientras que la disposición de Indonesia abarca a “toda persona” [Artículo 28E

(1) Toda persona será libre de elegir y practicar la religión de su elección, de elegir su educación [...]. (2) Toda persona tendrá derecho a la libertad de creer en su fe (*kepercayaan*), y a expresar sus opiniones y pensamientos, de acuerdo con su conciencia.]

Lo que no resta que la libertad de religión sea violada de manera recurrente en Pakistán ya que somete la libertad de religión al orden público y la moralidad.

Sin embargo, otras disposiciones constitucionales de muchos países en los que el islam está declarado como religión de Estado son menos claras, lo que plantea la posibilidad de que sólo se proteja a los grupos, y no a los individuos. La falta de protección explícita de los individuos significa que -dependiendo de la interpretación y la aplicación- el grupo o el Estado definen los parámetros exactos del derecho a la libertad de religión o creencia, en lugar del individuo.

En consecuencia, los individuos pueden no estar plenamente protegidos en su libertad de disentir de las enseñanzas religiosas establecidas (es decir, el derecho de un individuo a tener una religión o creencia que difiere o disiente de las normas o doctrinas de un grupo religioso con el que ese individuo pueda estar asociado). Varios países predominantemente musulmanes tienen constituciones que no enmarcan la libertad de religión y de creencias específicamente como un derecho individual, entre ellos Argelia [art. 51: La libertad de conciencia y la libertad de opinión son inviolables. La libertad de culto se garantiza y se ejerce sin discriminación, de acuerdo con la ley], Bahrein [art. 22: La libertad de conciencia es absoluta. El Estado garantiza la inviolabilidad del culto y la libertad de celebrar ritos religiosos y desfiles y reuniones religiosas de acuerdo con las costumbres observadas en el país], y Egipto [art. 64: La libertad de creencia es absoluta. La libertad de practicar ritos religiosos y de establecer lugares de culto para los seguidores de las religiones reveladas es un derecho organizado por la ley].

Garantías constitucionales contra la coerción en materia de creencias religiosas

Por último, varias constituciones contienen disposiciones destinadas a proteger a las personas contra coerción que pueda menoscabar la libertad de tener o adoptar una religión o creencia, reforzando la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencia.

Entre los ejemplos de países que incluyen estas disposiciones en sus constituciones se encuentran Albania, Bangladesh, Pakistán, Azerbaiyán, Turquía, Malasia y Sudán [art. 56. Toda persona tiene derecho a la libertad de creencias y de culto. Tendrán derecho a profesar o expresar su religión o sus creencias mediante el culto, la educación, la práctica, la realización de ritos o las celebraciones, de acuerdo con las exigencias de la ley y del orden público. Nadie podrá ser obligado a convertirse a una a una religión en la que no crea o a practicar ritos o celebraciones que no acepte voluntariamente].

Restricciones constitucionales al derecho a la libertad de religión o de creencias

Varios países con constituciones que establecen el Islam como religión del Estado no contienen garantías del derecho a la libertad de religión o de creencias, o contienen garantías que, a primera vista, no se comparan favorablemente con todos los aspectos de las normas internacionales. Algunos ejemplos de estos países son Irán, Libia y Omán. Algunos países, como Egipto y Arabia Saudí, afirman que estas restricciones se derivan de la posición del Islam

como religión estatal declarada y/o del papel del Islam o de la shari‘a en el sistema jurídico (UN, Egypt, 2002 a; UN, Saudi Arabia, 2001; UN, Saudi Arabia, 2003).

Comité de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), el órgano que evalúa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ha llegado a la conclusión que las restricciones impuestas por este motivo constituyen violaciones del PIDCP. Por ejemplo, el CDH expresó su preocupación por las “infracciones del derecho a la libertad de religión o de creencias” y por la falta de un sistema de seguridad de religión o creencia” en Egipto, deploró “la prohibición de culto impuesta a la comunidad bahaí” y pidió al gobierno que se asegurara de que “su legislación y su práctica son compatibles con el artículo 18 del Pacto” (UN, Egypt, 2002 b) (véase el caso Mohamed Hegazy, p. 23).

En todos los casos, cabe destacar que pueden existir diferencias en la práctica entre las disposiciones escritas y la aplicación real de los derechos (Pakistán, Bangladesh, etc.). De hecho, las violaciones del derecho a la libertad de religión o creencia no se limitan a los países con una religión estatal declarada; también pueden producirse violaciones similares en países en los que la constitución no prevé una religión estatal o una iglesia establecida.

A pesar de estos principios establecidos por el CDH, varios países predominantemente musulmanes que han ratificado el PIDCP tienen disposiciones constitucionales que, a primera vista, permiten limitaciones que no son coherentes con las normas internacionales. Por otra parte, en países como Maldivas, que no ha firmado el PIDCP, también existen limitaciones específicas que no se ajustan a las opiniones del CDH. Según la constitución de Maldivas, los derechos a la libertad de conciencia y de expresión pueden restringirse por motivos de “protección de los principios básicos del Islam” (art. 25). Por ejemplo, en Afganistán, el derecho a manifestar la religión está supeditado a las “disposiciones de la ley”, (Art. 2, Constitution of Afghanistan). El Artículo 3 estipula que “ninguna ley podrá contravenir los principios y disposiciones de la sagrada religión del Islam en Afganistán”. Lo que puede permitir limitaciones del derecho basado en motivos no enumerados. Además, las disposiciones de otros países introducen limitaciones no reconocidas por las normas internacionales, como el reconocimiento de una lista limitada de comunidades religiosas.

Libertad de religión y libertad de expresión

De entre los derechos humanos relacionados que se han analizado anteriormente, la libertad de religión o creencia está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, la aplicación de los delitos de blasfemia y de lesión de los sentimientos religiosos puede entrar en conflicto con el derecho a la libertad de expresión.

Este tipo de leyes “pueden utilizarse para suprimir la expresión de creencias religiosas u opiniones sobre temas religiosos que son percibidas como incorrectas o impopulares por los seguidores de otros grupos religiosos, especialmente del grupo dominante (Stahnke, 1999: 289; para un estudio más exhaustivo, véase Durham, Jr., 2013).

Igualdad y prohibición de la discriminación

Situación general

Muchas de las constituciones de países predominantemente musulmanes contienen disposiciones que abordan:

- La igualdad ante la ley;
- La igualdad de derechos y libertades (incluyendo en algunos casos la provisión específica de igualdad de derechos para hombres y mujeres); y
- La no discriminación en los derechos u otras actividades oficiales sobre la base de, entre otras cosas la religión y el género.

Limitaciones constitucionales y de otro tipo a los derechos de igualdad y no discriminación

Mujeres

Al menos cinco constituciones de países en los que el Islam es la religión del Estado, incluidos Egipto y Bahrein, supeditan explícitamente la igualdad a los principios islámicos o a las normas de la jurisprudencia islámica sobre el tratamiento de hombres y mujeres. (Bahrein, Egipto, Irán, Arabia Saudí y Yemen). Calificar la igualdad de esta manera puede someter las mujeres a un trato discriminatorio en la ley y en la práctica, especialmente en lo que respecta a cuestiones de estatus personal como el matrimonio, el divorcio, la custodia de hijos y la herencia. Normalmente, esta cuestión no suele plantearse en los Estados laicos, en los que el principio de igualdad se expresa sin reservas.

Puestos de poder

Por último, las constituciones de varios países predominantemente musulmanes pueden restringir únicamente a los ciudadanos musulmanes el derecho a ocupar puestos de gobierno y, en particular, a ejercer el poder ejecutivo. Esto se consigue exigiendo un juramento islámico específico o estipulando que sólo los musulmanes pueden ocupar un cargo determinado. Es el caso de Yemen, Túnez [art. 74. Todo elector, hombre o mujer, que posea la nacionalidad tunecina desde su nacimiento y cuya religión sea el Islam, tendrá derecho a presentarse como candidato al cargo de Presidente de la República], Siria, “la religión del Presidente de la República será el Islam”, y Pakistán, “Una persona no podrá ser elegida como Presidente a menos que sea musulmana”. En otros países predominantemente musulmanes, se exige un juramento islámico a los individuos antes de que se les permita tomar posesión del cargo.

Esta restricción también puede manifestarse en formas más específicas, en las que la práctica de una determinada rama del islam, a menudo en favor de otra comunidad musulmana, sea requerida para acceder a un cargo político. Por ejemplo, en las Maldivas, tienen que ser musulmanes y seguidores de una escuela sunita del Islam los miembros del Parlamento (art.73 (a)), el Presidente (art. 109), los Ministros (art. 130) y los jueces (art. 149 (b)).

En Brunei el art. 4 (5) estipula que el nombramiento de los Ministros y Viceministros se hará de entre la raza malaya que profesa la Religión Islámica. Dicho término está definido en el artículo 2: “Religión Islámica” significa la Religión Islámica según la secta Shafi‘i de la Ahlis Sunnah Waljamaah.

El acceso a los altos puestos de la administración, judicatura o del ejercito, etc. están también “reservados” aunque sea de manera informal a ciertas comunidades religiosas (Hanna, 2019)

Noción de orden público

Hemos visto en varios ejemplos de países, cómo interviene la noción de orden público a la hora de restringir algunas libertades religiosas. En su artículo, Hanna da varios ejemplos del uso de esta noción en Egipto (Hanna, 2015).

Nasr Hamid Abu Zayd

El caso del profesor Nasr Hamid Abu Zayd es interesante ya que:

- representa una de las articulaciones más claras de la concepción jurídica egipcia del orden público,
- es un testimonio del modo en que las ideas religiosas cada vez más restrictivas han impregnado la jurisprudencia egipcia.

La hisba

La práctica de hacer este tipo de acusaciones proliferó durante la década de 1990. “Muchos abogados islamistas han presentado demandas de *hisba* (Ezzat, 2020) contra laicos, feministas, liberales y otros” (Olsson, 2008: 98).

Según los grupos egipcios de derechos humanos, el número de casos relacionados con acusaciones de blasfemia, homosexualidad, violación de la decencia pública y amenaza al orden público ha aumentado de manera significativa desde el 2011 (EIPR, 2014; Freedom of Thought and Expression Law Firm, 2017; EIPR, 2017). El principio de *hisba* es “una práctica individual o colectiva de crítica moral definida técnicamente dentro de la shari‘a como la orden del bien cuando se descuida manifiestamente, y la prohibición del mal, cuando su práctica es manifiesta” (Agrama, 2012: 19).

La acusación inicial, presentada en 1993, sostenía que algunos de los escritos y pensamientos de Abu Zayd debían de ser considerados como apostasía (Hirschkind, 1995), basándose en la doctrina jurídica hanafí clásica¹⁷. La acusación sostenía además que su matrimonio con la también profesora Ibtihal Yunis debía ser anulado como consecuencia de la constatación de apostasía ya que una mujer musulmana no puede estar casada con un no-musulmán. Tres años más tarde, el Tribunal de Casación de Egipto confirmó la sentencia de apostasía (Bälz, 1997; Johansen, 2003) basada en sus escritos académicos y anuló su matrimonio.

Libertad de creencia según el dictamen

La sentencia del tribunal de apelación llegó a varias conclusiones importantes y preocupantes. En primer lugar, el tribunal abordó la cuestión de la libertad de creencia argumentando que la libertad de creencia no se definía como la libertad de creer lo que uno quisiera (Agrama, 2012: 51). Más bien, la libertad de creencia consistía en una protección contra aquellas acciones y prácticas que corrompieran la creencia religiosa y obstruyeran las condiciones necesarias para su correcto mantenimiento y práctica.

¹⁷ Existen cuatro principales escuelas jurídicas en el Islam. Egipto se rige por la hanafí.

Anticonstitucionalidad

En segundo lugar, el tribunal de apelación consideró que lo que Abu Zayd había escrito contravenía no sólo la religión, sino también la Constitución de la República Árabe de Egipto. Su artículo 2 establece que el Islam es la religión del Estado, y que los principios de la shari‘a islámica son la principal fuente de legislación... Por lo tanto, un ataque contra el [fundamento del Islam] es un ataque contra el Estado que se basa en él. También contravenía el artículo 9 de la Constitución que establece que la familia es la base de la sociedad, y su base es la religión¹⁸. Como señala acertadamente Agrama, el argumento del tribunal podría destilarse en la simple idea de que “Abu Zayd ha atacado los principios del propio orden público”.

1970

Otro caso que remonta a la década de 1970, define de manera clara el concepto de orden público¹⁹. El tribunal declaró que: “Comprende los principios (qawa‘id) que tienen por objeto realizar el interés público (almaslaha al-‘amma) de un país, desde una perspectiva política, social y económica. Estos [principios] están relacionados con el estado natural, material y moral (wad‘a) de una sociedad organizada, y superan los intereses de los individuos. El concepto de [orden público] se basa en una doctrina puramente laica que debe aplicarse como doctrina general (madhab ‘amm) a la que puede adherirse la sociedad en su conjunto y que no debe vincularse a ninguna disposición de las leyes religiosas. Sin embargo, esto no excluye que [el orden público] se base a veces en un principio relacionado con la doctrina religiosa, en el caso de que dicha doctrina se haya vinculado íntimamente con el orden jurídico y social, arraigado en la conciencia de la sociedad (damir al-mujtama‘), en el sentido de que los sentimientos generales (al-shu‘ur al-‘amma) se ven lesionados si no se adhiere a ella” (Agrama, 2012, 93).

A la misma época, Bint al-Shati, profesora de la Facultad de Derecho islámico de la Universidad de Al-Azhar, publicó un artículo en el diario *Al-Ahram* (9 de abril 1974) titulado “Apostasía y libertad de creencia”, en el que escribía: “Nada es más peligroso para una nación que un apóstata que reniega de su creencia y se declara libre de ella. Este apóstata ha elegido libremente la separación de su nación y sólo tiene que soportar las consecuencias de su separación [...]. Si el Islam amputa a ese miembro separado, busca con ello salvaguardar la entidad de su nación” (Abu-Sahlieh, 1979: 258). La apostasía se considera asimismo como un delito de alta traición al Estado y, por tanto, se castiga con las penas más severas. Se trata de una señal flagrante de confusión entre la religión y el Estado.

El orden público, pues, aunque difícil de determinar con especificidad, equivale simplemente a aquellas cuestiones que contribuyen al mantenimiento de la estabilidad y el bien colectivo. Está claro que los derechos de los individuos no se conciben como sacrosantos y que dicha aceptación del término, puede llevar a una interpretación muy laxa y por lo tanto a restricciones mucho más severas.

¹⁸ En la constitución de 2014, aparece en el artículo 10: “La familia es la base de la sociedad y se basa en la religión, la moral y el patriotismo. El Estado protege su cohesión y estabilidad, y la consolidación de sus valores.”

¹⁹ El caso se refería a un matrimonio cristiano mixto, que, a diferencia de los matrimonios cristianos dentro de la misma confesión, está sujeto a la shari‘a en virtud del derecho de familia egipcio. Asimismo, el marido cristiano reclamó el derecho a la poligamia.

Impacto del término “orden público” sobre la libertad religiosa

La utilización del término orden público produce dos efectos. Primero autoriza la intervención del Estado en el ámbito de las creencias religiosas. Y en segundo lugar, privilegia los valores y compromisos de la mayoría religiosa como la norma con la que se juzgan y sancionan las prácticas religiosas de la minoría (Mahmood y Danchin, 2014: 130). Este privilegio del discurso religioso de la mayoría y su establecimiento como prisma a través del cual se adjudican las consideraciones de un bien público más amplio tienen claramente graves implicaciones para los grupos minoritarios y para la posibilidad de la libertad religiosa y la libertad de creencia.

El caso de los bahaíes

Un ejemplo paradigmático de este enigma es el estatus y la situación de la minúscula comunidad bahaí de Egipto, que comprende menos del 1% de la población del país. Dado que los bahaíes nunca han sido minorías protegidas por la Constitución egipcia ni una minoría religiosa formalmente reconocida²⁰ por la shari‘a, como “Gente del Libro”, sus esfuerzos por conseguir diversos derechos han puesto de manifiesto las limitaciones de la libertad religiosa en la sociedad y la práctica jurídica egipcias. Se han enfrentado a graves restricciones en su capacidad para practicar su religión e interactuar con el Estado.

El decreto de 1960 emitido por el presidente Nasser (Ley 263/1960), que liquidó sus instituciones y prohibió la práctica de la religión obligó a la fe a pasar a la clandestinidad y a salir de la esfera pública, lo que complicó las interacciones de los ciudadanos bahaíes con las instituciones del Estado (como por ejemplo, los problemas a la hora de hacer constar su afiliación religiosa en sus documentos nacionales de identidad). Esta incapacidad de proporcionar dicho reconocimiento es especialmente significativa en Egipto como resultado de “la necesaria relación que se plantea entre el estatus religioso de una comunidad y su autonomía sobre el derecho de familia” (Mahmood y Danchin, 2014: 133).

Creencias religiosas privadas y su expresión pública

Los casos judiciales relacionados con el tratamiento de la fe bahaí han producido una serie de sentencias. En 2009, un tribunal administrativo trató de diferenciar entre las creencias religiosas privadas y la expresión pública de esas creencias. Así, el tribunal argumentó que la práctica abierta de los ritos religiosos se limitaba sólo a los reconocidos por la ley islámica. En Egipto (art. 3 Const.), se limita a la Gente del Libro, es decir, a los judíos y a los cristianos únicamente. (Mahmood y Danchin, 2014: 136).

Después un vaivén judicial, el Tribunal Supremo Administrativo confirmó la parte de la sentencia previa que garantizaba la libertad de creencia en el sentido privado (“Todo ser humano tiene derecho a creer en la religión o creencia que satisfaga su conciencia y complazca su alma”). Pero invocando explícitamente un orden público basado en la fe mayoritaria y sus restricciones, rechazó la idea de que la expresión pública de esas creencias fuera ilimitada: “En cuanto a la libertad de practicar ritos religiosos, está sujeta a la limitación... de respetar el orden público y la moral pública” (Mahmood y Danchin, 2014: 139). En un orden constitucional en el que la shari‘a es el principal punto de referencia, el mero hecho de permitir a los bahaíes

²⁰ En la Constitución de 2014, el artículo 3 precisa que “Los principios de las leyes de los cristianos y judíos egipcios son la principal fuente de leyes que regulan su estatus personal, sus asuntos religiosos y la selección de sus espirituales.” En ningún otro momento, se menciona otra religión que no sea el Islam, cristianismo o judaísmo.

enumerar su fe en un entorno puramente administrativo se considera un reconocimiento explícito de la religión y una afrenta a la cohesión social.

En una nueva apelación, la sentencia se limitó a permitir la colocación de un guion (-) en la línea reservada a la religión en los documentos oficiales de identidad de todos los ciudadanos egipcios que puedan presentar documentos que demuestren que ellos, o sus antepasados, eran seguidores de una creencia religiosa distinta de las reconocidas por el Estado²¹ (US Department of Justice, 2017, Human Rights Watch, 2009). El tribunal continuó explicando con más detalle los motivos para imponer estas limitaciones draconianas a los ciudadanos bahaíes, argumentando que la libertad de practicar ritos religiosos estaba “condicionada al cumplimiento del orden público y la moral pública” (Mahmood y Danchin, 2014, 143).

Implicaciones para la ciudadanía

Esta comprensión contextualizada del orden público en Egipto se deriva del “hecho de que es un Estado cuya religión oficial es el Islam, que es la religión de la mayoría de la población, y del hecho de que la shari‘a islámica es la principal fuente de legislación” (Mahmood y Danchin, 2014, 143). Es importante destacar que esta estrecha comprensión de la ciudadanía ha perdurado con los sucesivos esfuerzos de redacción constitucional en la era posterior a Mubarak. A medida que el proceso de redacción evolucionaba, la cuestión de cómo se trataría a los bahaíes se consideró una especie de prueba para el nuevo orden político de Egipto (Bashir, 2012).

Tanto la Constitución de 2012, dirigida por los Hermanos Musulmanes, como la de 2014, posterior a la toma de poder por El-Sissi, limitan el reconocimiento estatal de las religiones a los tres credos monoteístas. Ambas etapas de la transición egipcia, la continua marginación de los bahaíes es indicativa de la problemática percepción de la ciudadanía y el pluralismo, arraigada en el apego a estrechas concepciones de la cohesión social. De hecho, en diciembre de 2014, el Ministerio de Asuntos Religiosos organizó un taller público para advertir de los peligros de la propagación de la fe bahaí en Egipto (US Department of Justice, Baha’is, 2017).

Otros grupos como musulmanes chiíes o ateos son acosados (negación de un reconocimiento oficial de los ciudadanos chiíes que son declarados tanto en el censo como en los papeles de identidad como musulmanes, es decir, sunníes; persecución y condena por promover un islam que se aleja del islam egipcio) o ven sus libertades limitadas (Human Rights Watch, 2012; Mada Masr, 2014).

Deterioración de las relaciones sectarias

Un corolario del renacimiento religioso de Egipto y la correspondiente islamización del espacio y del discurso públicos ha sido un marcado deterioro de las relaciones sectarias y un aumento de la violencia y conflictos sectarios. A medida que ha aumentado la polarización política, el control estricto de las relaciones sectarias y de los límites de las creencias se ha entendido como una medida necesaria para preservar la cohesión y la estabilidad social.

Dos ámbitos del derecho ponen de relieve la manera en que los conceptos de orden público se han entrelazado inextricablemente con la vigilancia de las creencias y la gestión de las relaciones sectarias: la difamación y la conversión. En cada uno de estos ámbitos, los derechos individuales se han sacrificado en nombre del orden social, un modelo que refleja además la

²¹ Esta condición impuesta permite que la mención del guion no pueda ser utilizada por los ateos o agnósticos así como los apóstatas.

internalización del fanatismo sectario en la administración del Estado y la justicia penal. En cada uno de estos ámbitos, se han sacrificado los derechos individuales en nombre del orden social, una pauta que refleja además la internalización del fanatismo sectario en la administración estatal y la justicia penal.

La conversión

En lo que respecta a la conversión, el Estado egipcio ha reflejado durante mucho tiempo los prejuicios y sesgos sociales generalizados, como lo demuestra el tratamiento dispar de los casos de conversión o de intento de conversión. En los últimos años, incluso la cuestión de la conversión del cristianismo al islam, que durante mucho tiempo se ha considerado una práctica aceptable y bienvenida, se ha convertido en una cuestión de interés para el Estado, ya que las autoridades han tratado en ocasiones de disuadir esta práctica por temor a las tensiones y la violencia entre comunidades.

En los últimos años, sobre todo en lo que respecta a la conversión de las mujeres, las autoridades se han enfrentado a las denuncias oficiales de la Iglesia sobre conversiones forzadas y secuestros. Independientemente de la veracidad de estas denuncias, lo que subyace a esta preocupación oficial más reciente es el temor a las luchas comunales. Sin embargo, los esfuerzos oficiales para frenar la conversión de cristianos (entre 10% y 12% de la población del país) al islam no son la norma, mientras que la coherencia de la negativa estatal a conceder la conversión de musulmanes al cristianismo refleja la política estatal. Además, esta negativa se extiende a las personas que nacieron cristianas, se convirtieron a la religión musulmana durante un tiempo (por motivos de matrimonio o divorcio por ejemplo) y desean volver a convertirse al cristianismo, así como a las personas que se “convirtieron” o fueron convertidas involuntariamente al islam (normalmente como resultado de la conversión de uno de los padres al islam) (El Fegiery, 2013: 13; Human Rights Watch, 2007; Egyptian Initiative for Personal Rights, 2007, 20). Estas negativas tienen su origen tanto en el rechazo a la práctica de la conversión de los musulmanes al cristianismo como en distintas nociones de orden público.

Debido al estigma social, a la exposición legal asociada a esta forma de conversión y al rechazo casi sistemático, el número de personas que han solicitado el reconocimiento oficial a través del Estado ha sido muy reducido (Human Rights Watch y Egyptian Initiative for Personal Rights, 2007). Aunque la jurisprudencia sobre esta cuestión ha sido un tanto variada, los tribunales egipcios han rechazado de forma abrumadora esta forma de conversión por considerar que tales acciones son apostasía y contravienen el orden público en un país de mayoría musulmana regido por la shari‘a. En los raros casos documentados en los que los individuos han proclamado públicamente su conversión al cristianismo, las autoridades han recurrido a veces a la detención explícitamente basada en la preservación del orden público. Fue el caso de Mohamed Hegazy, quien tuvo años de luchas judiciales con el fin de que su conversión al cristianismo fuera oficialmente reconocida. El Ministerio del Interior se negó a cambiar su estatus religioso en su documento de identidad. Hegazy recurrió al Tribunal Administrativo que rechazó su petición basándose en la prohibición de la apostasía en el Islam y en la protección del orden público en una sociedad musulmana. El demandante invocó la obligación internacional del gobierno egipcio basada en el artículo 18 del PIDCP, ya que según la constitución de 1971 dichas obligaciones internacionales se convierten en legislación interna.

Sin embargo, el Tribunal sostuvo que las disposiciones del PIDCP están limitadas por las normas de la ley islámica. Fue encarcelado y torturado. A su liberación en el 2016, después de

dos años y medio de detención, declaró públicamente en YouTube que había vuelto al islam (El Fegiery, 2013: 13).

Difamación religiosa

Sobre las disputas legales en Egipto, se cierne el omnipresente espectro de la violencia comunal, que endurece aún más el apego oficial a las nociones de orden público. Habitualmente, las autoridades ignoran sistemáticamente y no persiguen estos arrebatos que provocan represalias violentas contra las otras comunidades.

Los casos de difamación religiosa y blasfemia, que han sido una característica constante del panorama jurídico egipcio en años anteriores, se dispararon tras la caída de Mubarak y durante la breve época de ascenso de los Hermanos Musulmanes. Es importante señalar que estos casos continúan en la actualidad, reflejando las inclinaciones administrativas y sociales que son independientes de la autoridad política islamista. También es notable el hecho de que los casos de difamación no se han centrado únicamente en las poblaciones minoritarias, aunque están desproporcionadamente representadas, sino que también se han dirigido a los ciudadanos suníes.

En agosto de 2014, el EIPR publicó un informe que documentaba 36 casos de difamación religiosa desde el levantamiento del 25 de enero de 2011 (Egyptian Initiative for Personal Rights, 2014). Esos casos afectaban a 63 ciudadanos, 26 de los cuales eran cristianos (es decir el 40%, o sea entre 3 y 4 veces más elevado que la proporción nacional); 36 eran musulmanes, con 26 musulmanes suníes y 10 chiíes (15% de los casos, cuando se estima que los chiíes representan entre el 0,5 y el 1% de la población egipcia)²²; y 1 ahmadí (Egyptian Initiative for Personal Rights, 2014). Estos casos de difamación del islam se basaban en la acusación de que dichas acciones difamaban o blasfemaban el islam, mostraban desprecio por sus seguidores y “propagaban oralmente ideas extremistas con la intención de exacerbar el conflicto civil” (Egyptian Initiative for Personal Rights, 2014, 11). Los procedimientos para estas acusaciones y detenciones sugieren que la mera alegación con pocas o ninguna prueba es suficiente (Ibrahim, 2021) para la detención, un resultado que depende no sólo de las costumbres sociales, sino también del temor a la violencia sectaria.

Conclusión

Como se puede ver con el caso egipcio, el empleo en exceso de una concepción amplia y represiva del orden público sirve, en los países que recurren a esta noción, a limitar una amplia variedad de derechos individuales: no sólo en el ámbito de la religión y las creencias, sino también en otros ámbitos en los que se ha percibido que el orden público está en peligro. Esta práctica no está vinculada únicamente al periodo más reciente y representa un fenómeno mucho más arraigado que implica las creencias estatistas duraderas.

Esta herramienta, así como el recurso a las limitaciones de la shari‘a, permiten contravenir las disposiciones constitucionales o legales que promueven la libertad de religión y conciencia o de expresión.

²² Egypt bans Shiite websites to deter extremist ideologies, Menna Farouk, 3 marzo 2020, Al-Monitor, <https://www.al-monitor.com/originals/2020/03/egypt-ban-shiite-websites-religious-extremism-security.html>
Egypt Shi'a, Minority Rights Group International, octubre 2017, <https://minorityrights.org/minorities/shia-3/>

Incluso en algunos casos, países en los cuales los derechos de las minorías religiosas están violados, intervienen en foros internacionales para promover la condena a la blasfemia, en nombre de la lucha mundial contra la islamofobia. Es el caso de Pakistán.

No hemos podido abordar la problemática de la libertad de religión y conciencia en la educación. ¿Qué lugar y representación tiene el Otro en los libros de texto? ¿Quién es el verdadero ciudadano? ¿Cómo es presentada la religión y qué importancia tiene? Como varios países musulmanes consiguen apartar o menospreciar en el imaginario colectivo a toda una parte de la población y ahondar las brechas entre los ciudadanos de segunda clase y los demás (Razzaq, 2021).

Bibliografía

Abu-Sahlieh, Sami Awad Aldeeb. 1979. *L'impact de la religion sur l'ordre juridique. Cas de l'Égypte. Non-musulmans en pays d'Islam*. Fribourg: Presses Universitaires de Fribourg.

Agrama, Hussein Ali. 2012. *Questioning Secularism: Islam, Sovereignty, and the Rule of Law in Modern Egypt*. Chicago: University of Chicago Press.

Aid to the Church in Need. 2021. *Religious Freedom in the World*. Disponible en web: <https://acninternational.org/religiousfreedomreport/home/> [Consulta: 28 de junio de 2021]

Bälz, Kilian. 1997. "Submitting Faith to Judicial Scrutiny through the Family Trial: The 'Abu Zayd Case'", *Die Welt des Islams*, 37 (2): 135–55.

Bashir, Dwight. 2012. "A Baha'i Litmus Test for Egypt", *The Cairo Review of Global Affairs*.

BBC World. 12 julio 2020. "Sudan scraps apostasy law and alcohol ban for non-Muslims". Disponible en web: <https://www.bbc.com/news/world-africa-53379733> [Consulta: 27 de junio de 2021]

Berger, Maurits. 2001. "Public Policy and Islamic Law: The Modern Dhimmī in Contemporary Egyptian Family Law", *Islamic Law and Society*, 8 (1): 88-136. Disponible en web: https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.northwestern.edu/dist/c/1549/files/2017/07/Berger_Public-Policy-and-Islamic-Law_2001-2im68i9.pdf [Consulta: 28 de junio de 2021]

Datta, Anusuya. 2016. *Interactive map shows where atheists are most persecuted*. Disponible en web: <https://www.geospatialworld.net/blogs/interactive-map-shows-countries-where-atheists-persecuted/> [Consulta: 25 de junio de 2021]

Desilver, Drew y David Masci. 2017. "World's Muslim population more widespread than you might think", *Pew Research Center*. Disponible en web: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/> [Consulta: 25 de junio de 2021]

Durham, Jr., W. Cole, Silvio Ferrari, Cristiana Cianitto y Donlu Thayer, eds. 2013. *Law, Religion, Constitution: Freedom of Religion, Equal Treatment, and the Law*, Abingdon-on-Thames: Routledge.

Egyptian Initiative for Personal Rights. 2014. *Besieging Freedom of Thought: Defamation of Religion Cases in Two Years of the Revolution*. Disponible en web: <https://eipr.org/en/publications/besieging-freedom-thought-defamation-religion-cases-two-years-revolution> [Consulta: 25 de junio de 2021]

Egyptian Initiative for Personal Rights. 2017. *The Trap: Punishing Sexual Difference in Egypt*. Disponible en web: https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/the_trap-en.pdf [Consulta: 29 de junio de 2021]

Egyptian Streets. 26 noviembre 2019. *Coptic Woman Granted Equal Inheritance by Egyptian Court*. Disponible en web: <https://egyptianstreets.com/2019/11/26/coptic-woman-granted-equal-inheritance-by-egypts-supreme-court/> [Consulta: 30 de junio de 2021]

El Fegiery, Moataz Ahmed. 2013. "Islamic Law and Freedom of Religion: The Case of Apostasy and Its Legal Implications in Egypt", *Muslim World Journal of Human Rights*, 10 (1): 1–26. Disponible en web: <https://cihrs.org/wp-content/uploads/2013/09/Moataz-Apostasy.pdf> [Consulta: 28 de junio de 2021]

Ezzat, Ahmed. 2020. "Law and Moral Regulation in Modern Egypt: Hisba from Tradition to Modernity", *International Journal of Middle East Studies*, 52 (4): 665-684. Disponible en web: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/law-and-moral-regulation-in-modern-egypt-hisba-from-tradition-to-modernity/A9D70921E117DE837A068CDE64CCFAC6> [Consulta: 30 de junio de 2021]

Freedom House. 2019. *Comoros*. Disponible en web: <https://freedomhouse.org/country/comoros/freedom-world/2019> [Consulta: 24 de junio de 2021]

Freedom of Thought and Expression Law Firm. 2017. *Creativity Certificates: About the Judiciary Assessment of Creative Works*. Disponible en web: https://afteegypt.org/en/freedom_creativity-2/2017/04/23/12999-afteegypt.html [Consulta: 24 de junio de 2021]

Hanna, Michael Wahid. 2019. "Excluded and Unequal Copts on the Margins of the Egyptian Security State", *The Century Foundation*. Disponible en web: <https://tcf.org/content/report/christian-exclusion-from-egypts-security-state/?agreed=1> [Consulta: 25 de junio de 2021]

Hanna, Michael Wahid. 2019. "Public Order and Egypt's Statist Tradition", *The Review of Faith & International Affairs*, 13 (1): 23-30.

Hirschkind, Charles. 1995. "Heresy or Hermeneutics: The Case of Nasr Hamid Abu Zayd", *American Journal of Islamic Social Science*, 12 (4): 463-477.

Human Rights Watch and the Egyptian Initiative for Personal Rights. 2007. *Egypt: Prohibited Identities: State Interference with Religious Freedom*. Disponible en web: <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt1107webwcover.pdf> [Consulta: 29 de junio de 2021]

Human Rights Watch. 2009. *Egypt: Decree Ends ID Bias Against Baha'is*. Disponible en web: <http://www.hrw.org/news/2009/04/15/egypt-decree-ends-id-bias-against-bahais> [Consulta: 23 de junio de 2021]

Human Rights Watch. 2012. *Egypt: Lynching of Shia Follows Months of Hate Speech*. Disponible en web: <http://www.hrw.org/news/2013/06/27/egypt-lynching-shia-follows-months-hate-speech> [Consulta: 30 de junio de 2021]

Human Rights Watch. 2017. *Saudi Arabia: New Counterterrorism Law Enables Abuse*. Disponible en web: <https://www.hrw.org/news/2017/11/23/saudi-arabia-new-counterterrorism-law-enables-abuse> [Consulta: 26 de junio de 2021]

Human Rights Watch. 2018. *World Report 2018: Events of 2017 – Bangladesh*. Disponible en web: <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/bangladesh#> [Consulta: 26 de junio de 2021]

Ibrahim, Ishak. 2021. "Contempt of Religion in North Africa: Repression of Minorities and Monopoly on Interpretation of Religion", *The Tahrir Institute for Middle East Policy*. Disponible en web: <https://timep.org/commentary/analysis/contempt-of-religion-in-north-africa-repression-of-minorities-and-monopoly-on-interpretation-of-religion/> [Consulta: 25 de junio de 2021]

Illahi, Mahboob. 2018. *Doctrine of Terror: Saudi Salafî Religion*. Victoria: Friesen Press.

Johansen, Baber. 2003. "Apostasy as Objective and Depersonalized Fact: Two Recent Egyptian Court Judgments", *Social Research*, 70(3): 687-710.

- Knight, Nauzanin A. 2015. *State Terrorism in Iran: Understanding the Case of the Iranian Bahá'í Community*. Boca Raton: Dissertation.Com.
- Lord, Ceren. 2018. *Religious Politics in Turkey: From the Birth of the Republic to the AKP*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mada Masr. 2014. *Authorities Raid and Close 'Atheists' Café' in Downtown Cairo*. Disponible en web: <http://www.madamasr.com/news/authorities-raid-close-atheists-cafe-downtown-cairo> [Consulta: 26 de junio de 2021]
- Madanat, Philip Odeh. 2019. *Framing the Friday Sermon to Shape Opinion: The Case of Jordan*. Lanham (US): Lexington Books.
- Mahmood, Saba, y Peter G. Danchin. 2014. "Immunity or Regulation? Antinomies of Religious Freedom", *The South Atlantic Quarterly*, 113 (1): 129–159.
- Olsson, Susanne. 2008. "Apostasy in Egypt: Contemporary Cases of Hisbah", *The Muslim World*, 98 (1): 95–115.
- Pew Research Center. 2017. *Many Countries Favor Specific Religions, Officially or Unofficially*. Disponible en web: <https://www.pewforum.org/2017/10/03/many-countries-favor-specific-religions-officially-or-unofficially/> [Consulta: 25 de junio de 2021]
- Pew Research Center. 2019. *A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World*. Disponible en web: <https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/> [Consulta: 29 de junio de 2021]
- Razzaq, Fatima. 2021. *A textbook case of prejudice*. Disponible en web: <https://sujag.org/single/single-national-curriculum-prejudice-en> [Consulta: 28 de junio de 2021]
- Stahnke, Tad. 1999. "Proselytism and the Freedom to Change Religion in International Human Rights Law." *Brigham Young University Law Review*, 1: 252-354. Disponible en web: <https://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1958&context=lawreview> [Consulta: 30 de junio de 2021]
- UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. 2001. "Reports Submitted By Saudi Arabia Under Article 9 of the Convention," UN Doc. CERD/C/370/Add.1 and Corr.1.
- UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. 2003. "Summary Record of the 1558th Meeting: Consideration of Reports, Comments and Information Submitted By Saudi Arabia Under Article 9 of the Convention," UN Doc. CERD/C/SR.1558.
- UN Human Rights Committee. 2002 a. CCPR/C/SR.2048, , "Summary Record of the 2048th Meeting: Consideration of Reports Submitted By Egypt Under Article 40 of the Covenant," UN Doc. CCPR/C/SR.2048.
- UN Human Rights Committee. 2002 b. CCPR/CO/76/EGY, 2002, Para. 17, Human Rights Committee, "Concluding Observations of the Human Rights Committee: Egypt" UN Doc.
- (USDS) United States Department of State - Office of International Religious Freedom. 2019. *International Religious Freedom Report for 2019 Maldives*. Disponible en web: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/MALDIVES-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf> [Consulta: 24 de junio de 2021]
- (USDS) United States Department of State - Office of International Religious Freedom. 2019. *Report on International Religious Freedom: Turkmenistan*. Disponible en web: <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/turkmenistan/> [Consulta: 25 de junio de 2021]

(USDS) United States Department of State - Office of International Religious Freedom. 2019. *Report on International Religious Freedom: Uzbekistan*. Disponible en web: <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/uzbekistan/> [Consulta: 28 de junio de 2021]

(USDS) United States Department of State - Office of International Religious Freedom. 2019. *Report on International Religious Freedom: Kazakhstan*. Disponible en web: <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/kazakhstan/> [Consulta: 23 de junio de 2021]

(USDS) United States Department of State - Office of International Religious Freedom. 2020. *Report on International Religious Freedom: Algeria*. Disponible en web: <https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/algeria/> [Consulta: 23 de junio de 2021]

(USDS) United States Department of State - Office of International Religious Freedom. 2019. *Report on International Religious Freedom: Indonesia*. Disponible en web: <https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/indonesia/> [Consulta: 25 de junio de 2021]

(USDS) United States Department of State – U.S. Commission on International Religious Freedom. 2019. *Annual Report 2021*. Disponible en web: <https://www.uscifr.gov/sites/default/files/2021-04/2021%20Annual%20Report.pdf> [Consulta: 24 de junio de 2021]

United States Department of Justice. 2017. “Egypt - Baha’i of Egypt”. Disponible en web: <https://www.justice.gov/eoir/page/file/1026766/download> [Consulta: 24 de junio de 2021]

USCIRF. 2018. *USCIRF Annual Report. Saudi Arabia Tier 1. Uscirf-recommended countries of particular concern (CPC)*. Disponible en web: <https://www.justice.gov/eoir/page/file/1133831/download> [Consulta: 23 de junio de 2021]

World Population Review. 2021. *Muslim Majority Countries 2021*. Disponible en web: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-majority-countries> [Consulta: 25 de junio de 2021]